Recomendación N°	30/2016
Autoridad Responsable	Procurador General de Justicia del Estado
Expediente	1VQU-0449/2014
Fecha de emisión	16 de Diciembre de 2016

HECHOS

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, V2, V3 y V4, atribuibles al Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Penal en relación al derecho de las víctimas sobre el acceso a la debida procuración de justicia.

Q1, manifestó que sus familiares V1, V2, V3 y V4 habían desaparecido, y el 3 de julio de 2013 fueron localizados sin vida, motivo por el cual la Policía Ministerial inició la investigación correspondiente. Que el 4 de julio de 2013, los presuntos responsables del secuestro y homicidio de sus familiares fueron detenidos por Elementos de la Policía Ministerial del Estado.

Sobre estos hechos, la Agencia del Ministerio Público Especializado en Alto Impacto Inició la Averiguación Previa 1, la cual consignó al Juzgado Tercero del Ramo Penal. Posteriormente las personas señaladas como probables responsables de la participación en los hechos, recobraron su libertad por falta de elementos para procesar. Las personas quejasas, señalaron que en el caso se evidenció una irregular integración de la indagatoria penal, lo que al final generó impunidad por la falta de castigo a los responsables.

Derechos Vulnerados

✓ Víctimas al Acceso a la Justicia y a la Debida Procuración de Justicia

OBSERVACIONES

En tal sentido, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 1VQU-0449/2014, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneró el derecho a la seguridad jurídica en específico al acceso a la debida procuración de justicia en agravio de V1, V2, V3 y V4, atribuibles a AR1, Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Alto Impacto, así como a AR2, AR3 AR4 y AR5, elementos de la Policía Ministerial del Estado, en atención a las siguientes consideraciones.

Los hechos indican que el 3 de julio de 2013, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Alto Impacto, inició la Averiguación Previa 1, por la privación de la vida de V1, V2, V3 y V4, quienes fueron encontrados al interior de un vehículo en la Delegación de Villa de Pozos, San Luis Potosí. En su queja, Q1 señaló que por las irregularidades cometidas por AR1, Agente del Ministerio Público, y por AR2, AR3, AR4 y AR5, elementos de la Policía Ministerial del Estado, los presuntos responsables de la muerte de sus familiares V1, V2, V3 y V4, recobraron su libertad.

Con base a las evidencias que se recabaron, se observó que el 4 de julio de 2013, a las 20:00 horas, AR2, AR3, AR4 y AR5, rindieron el informe de investigación dentro de la Averiguación Previa 1, y dejaron a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Alto Impacto a 6 personas por su probable participación en los hechos donde perdieran la vida V1, V2, V3 y V4, el 3 de julio de 2013.

Los agentes de la Policía Ministerial del Estado, manifestaron que el 5 de julio de 2013, detuvieron a los presuntos responsables en cumplimiento a la orden librada por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Mesa III, Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto, y de acuerdo a las constancias que se recabaron se observó que la citada orden se cumplimentó 10 horas después de la puesta a disposición, ya que se evidenció que primero los responsables fueron puestos a disposición del Representante

Social y luego se cumplimentó dicha orden.

En este mismo contexto, de acuerdo con la valoración del Juez de Distrito, los elementos de la Policía Ministerial del Estado, detuvieron a los presuntos responsables sin que existiera orden de aprehensión previa, ni se actualizó la hipótesis de que se estuviera ante un caso urgente o que se haya efectuado en flagrancia, ya que para este último aspecto, detuvieron a las personas con posterioridad a los hechos, si se toma en cuenta que el delito probablemente se cometió el 2 de julio de 2013.

Se observó que el 5 de julio de 2013, AR1, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Mesa III Especializada en Delitos de Alto Impacto, ordenó la detención de las 4 personas que fueron puestas a su disposición por los elementos de la Policía Ministerial, como presuntos responsables de los hechos de privación de la vida de V1, V2, V3 y V4; no obstante, que se observó que no se emitió acuerdo previo por parte del Agente del Ministerio Público Investigador para ordenar la detención por caso urgente. Incluso, se evidenció que acordó la detención a las 00:20 horas del 5 de julio de 2013, 4 horas después de que fueron puestos a su disposición.

Con relación a la detención de los inculpados, el Juez Sexto de Distrito dentro del Juicio de Amparo 2, determinó que esa detención había sido ilegal, al no acreditarse los supuestos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual imposibilitó tomar en consideración para la demostración del cuerpo del delito, ya que los datos que se obtuvieron para sustentarla derivaron de la actuación ilegal de los agentes aprehensores.

El Juez Sexto de Distrito, concluyó que las pruebas que se obtuvieron a partir de la detención de las personas inculpadas, señaladas como probables responsables de la privación de la vida de V1, V2, V3 y V4, no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 16 Constitucional, y no se acreditó que la detención haya sido en caso urgente, por lo que el 23 de mayo de 2014, el Juez Tercero del Ramo Penal dictó auto de libertad.

Con base a las consideraciones expresadas por el Juez de Distrito, se advierte de la irregularidad cometida por AR1, servidor público de la Procuraduría de Justicia del Estado, lo cual trajo como consecuencia que los inculpados quedaran en libertad, no por haberse acreditado su inocencia sino por las violaciones al debido proceso, lo que ocasionó que las víctimas, así como sus familiares vieran obstaculizado sus derechos de acceso a la justicia, así como la consecuente sanción y a la reparación del daño y generando con ello impunidad.

Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Ahora bien, el Juez Sexto de Distrito, dentro del Juicio de Amparo 2, ordenó se diera vista a la Representación Social, por la posible comisión de actos de tortura, debido a que los presuntos entonces responsables refirieron que al momento de su aprehensión los elementos aprehensores los torturaron, por lo que el Juez Tercero del Ramo Penal dio vista a la Representación Social y se inició la Averiguación Previa 2, en contra de AR2, AR3, AR4 y AR5, elementos de la Policía Ministerial del Estado.

Por lo expuesto, las evidencias permiten advertir que AR1, Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Alto Impacto, y AR2, AR3, AR4 y AR5, elementos de la Policía Ministerial del Estado, al tener a su cargo la investigación de la privación de la vida de V1, V2, V3 y V4, cometieron irregularidades en torno a la investigación, que propició que las personas inculpadas obtuvieran su libertad, trasgrediendo los derechos de las víctimas del delito.

En este orden de ideas, es de considerarse que AR1, se apartó de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado; 117 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí; que en términos generales disponen que los Agentes del Ministerio Público, observarán los principios de unidad de actuación, legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

Por lo anterior, para este Organismo Estatal, los servidores públicos AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, con sus actuaciones vulneraron en agravio de las víctimas del delito el derecho a la seguridad jurídica, específicamente de acceso a la justicia contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como 4,5,8,y 9 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, los cuales en términos generales establecen que las víctimas tendrán derecho al acceso a los mecanismo de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido.

Es pertinente señalar que, en un Estado de Derecho, la investigación sobre los hechos que se denuncian ante la autoridad ministerial debe ser efectiva, orientada hacia el esclarecimiento y la determinación de la verdad sobre lo ocurrido, teniendo presente que para asegurar el derecho al acceso a la justicia, la investigación penal debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad, como en este asunto, en el que se vulneró el derecho a una investigación oportuna y eficaz.

Con su proceder, también se apartaron de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y del 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para la Víctimas y del Abuso de Poder, que establecen los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia para que toda persona pueda recurrir a los Tribunales para hacer valer sus derechos y disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia los proteja contra actos de autoridad que trasgreden los derechos consagrados constitucionalmente, que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección.

Es de tenerse en consideración que con las irregularidades, por parte de AR1 AR2, AR3, AR4 y AR5, afecta el derecho humano de acceso a la justicia, porque obstaculiza la procuración y administración de justicia, incumpliendo con ello lo dispuesto en los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 17 y 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en términos generales señalan que toda persona tiene derecho a que se le procure y administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se realicen acciones efectivas a efecto de garantizar el pago de la reparación del daño a los familiares de las víctimas V1, V2, V3 y V4, que incluya el tratamiento médico y psicológico que en su caso requieran, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Gire la instrucciones al Visitador General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto ante el órgano de Control Interno y colabore con éste para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento.

TERCERA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de los familiares de V1, V2, V3 y V4, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, y proporcione la información que en su caso se le solicite.